

## AMÉRICA LATINA

### I. DEMANDA SOCIAL Y OPOSICIÓN ESTATAL POR RECURSOS NACIONALES. EL CASO DE BOLIVIA

*Nieves Zúñiga García-Falces\**

América Latina es una de las regiones del mundo más ricas en recursos naturales. Esa riqueza y sus condiciones políticas y económicas la convierten en objetivo de las empresas transnacionales y de las grandes potencias necesitadas de estos recursos. Las condiciones de explotación y distribución de estos bienes, junto con la inestabilidad política y las crisis económicas que afectan a una población cada vez más descontenta, han provocado fuertes conflictos sociales en diversos países latinoamericanos. Un ejemplo es el que se produjo en los últimos meses del año 2003 en Bolivia.

Las manifestaciones en Bolivia, junto con los levantamientos en Ecuador en enero de 2000 y febrero de 2001, que se repetían en febrero de 2004,<sup>1</sup> son buenos ejemplos de protestas sociales contra las políticas de privatización adoptadas por los gobiernos latinoamericanos. Las reformas económicas introducidas en la mayor parte de la región en las

---

\* Investigadora del CIP y redactora jefe de la revista *Papeles de cuestiones internacionales*.

<sup>1</sup> En enero de 2000, la crisis económica y la política neoliberal de Jamil Mahuad provocaron una protesta social que acabó con su mandato. El movimiento indígena, uno de los sectores sociales más afectados por las medidas, junto con los militares, fue el protagonista del derrocamiento de Mahuad. Su sucesor, Gustavo Noboa, continuó con la misma política económica e instauró la dolarización, lo que provocó en febrero de 2001 una fuerte movilización de los indígenas —en Quito se concentraron alrededor de 4.000— y la paralización del país mediante el bloqueo de carreteras. Nieves Zúñiga García-Falces, *Ecuador: Observatorio de Conflictos. Serie Indigenismo*, Centro de Investigación para la Paz (CIP), febrero de 2002. En: [www.fuhem.es/cip/indigen/proyecto.htm](http://www.fuhem.es/cip/indigen/proyecto.htm).

décadas de los ochenta y noventa han supuesto un incremento de la vulnerabilidad económica y más precariedad social. El modelo económico está directamente relacionado con la gestión de los recursos naturales que poseen muchos de esos países y su saqueo conduce a conflictos entre la sociedad civil y los estados. La vulnerabilidad económica, las limitaciones institucionales para responder a las crecientes demandas sociales y una crisis de representatividad de los partidos políticos son algunas debilidades a las que se enfrenta América Latina y que toman forma en relación con los conflictos por recursos naturales.

La cuantiosa riqueza natural de Bolivia —el 49% de su territorio contiene hidrocarburos (gas y petróleo) y ocupa el segundo lugar en América Latina por el volumen de reservas de gas natural—; los altos índices de pobreza de la mayor parte de su población —según el censo de 2001, el 58,6% de la población boliviana es pobre y el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que el 75% de los bolivianos se encuentra en condiciones de pobreza extrema y que, en el ámbito rural, el porcentaje alcanza el 90,8%— y una gestión antipopular y desigual de sus recursos naturales, son los elementos que conforman un escenario compartido con otros países de América Latina. La represión y la fuerza son, en muchas ocasiones, las respuestas de unos gobiernos cuya capacidad democrática cada vez es más débil.

En septiembre y octubre de 2003, una revuelta social convulsionó las estructuras del estado boliviano y le costó la Presidencia al ahora ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. La gestión del gas fue el detonante de una crisis generalizada que ha traspasado las fronteras nacionales y ha logrado despertar los viejos fantasmas de guerras perdidas, como la que enfrentó a Chile y Bolivia por el acceso al mar (la Guerra del Pacífico de 1879, que finalizó con victoria chilena).<sup>2</sup> El proyecto al que se opone la mayoría de los bolivianos es la exportación de gas a Norteamérica a través de Chile o Perú. Este proyecto, impulsado por el consorcio Pacific LNG —constituido por la española Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Energy, subsidiaria de British Petroleum—, sólo dejaría cincuenta millones de dólares anuales de beneficios para Boli-

---

<sup>2</sup> En 1904 se firmó el tratado que delimitó las actuales fronteras de Chile y Bolivia.

via, mientras que supondría mil millones de dólares al año para las multinacionales. El conflicto, que costó la vida a ochenta personas y provocó 400 heridos, es un ejemplo más de un modelo de crisis con características comunes.

### **Estados débiles: inestabilidad democrática y falta de representatividad política**

La historia política de Bolivia se ha caracterizado por la inestabilidad y por una importante presencia militar en el poder. En 179 años de independencia del país se han producido alrededor de 180 golpes de estado. Tras el gobierno militar de Hugo Bánzer, entre 1978 y 1980, tuvieron lugar tres elecciones fallidas y dos de los golpes de estado más sangrientos, además de varios contragolpes de estado y numerosas conspiraciones.<sup>3</sup> En 1982 se reinstaló la democracia electoral pero, en la práctica, se impuso un modelo político muy permisivo con la corrupción y el clientelismo. De acuerdo con estándares internacionales, Bolivia pasó de ocupar el puesto 71 en los índices de corrupción en el año 2000 al lugar 106 en 2003.<sup>4</sup> El uso patrimonial de la Administración pública por parte de los partidos políticos en el gobierno ha caracterizado la actuación de unos representantes políticos que piensan más en sus intereses particulares que en los de su pueblo.

En las elecciones de 2002, el poder se lo disputaron dos candidatos radicalmente opuestos: el líder cocalero Evo Morales, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), representante de un amplio sector de la sociedad, y Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los empresarios mineros más poderosos del país, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de tendencia liberal. Sánchez de Lozada ganó los comicios, pero no obtuvo los votos necesarios para asumir el cargo de modo directo. Para lograrlo tuvo que formar una coalición de partidos y aliarse

<sup>3</sup> Francisco Leal Buitrago, «Crisis de la región andina: fragilidad democrática, inestabilidad social y Plan Colombia», en Klaus Bodemer (Ed.), *El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina. ¿Amenaza para la democracia?*, Recal, IIK, FLACSO-Chile, Nueva Sociedad, Caracas, 2003.

<sup>4</sup> Andrés Villar, «Bolivia, ¿y ahora qué?», en *Observatorio. Crisis en Bolivia*, FLACSO-Chile, octubre de 2003.

con Nueva Fuerza Republicana (NFR) y con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de orientación socialdemócrata y liderado por el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Finalmente Sánchez de Lozada ocupó por segunda vez la presidencia en agosto de 2002 (su mandato anterior había durado de 1993 a 1997).

Durante su mandato aplicó una política económica de corte neoliberal con el fin de cumplir las promesas de mejora económica, lucha contra la corrupción y creación de puestos de trabajo. Como resultado de sus gestiones presidenciales, logró ser el hombre más acaudalado del país con un capital declarado de 55 millones de dólares (y un importante capital estimado),<sup>5</sup> pero también provocó el aumento de la pobreza y la desesperación de la población y un rechazo masivo de la sociedad boliviana.

La crisis desatada a raíz de la denominada guerra del gas agudizó la inestabilidad política y creó discrepancias entre los socios de la coalición gubernamental. El 13 de octubre, el vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo a Sánchez de Lozada, mientras algunos ministros del aliado Nueva Fuerza Republicana dimitieron de sus cargos. En relación con la responsabilidad de los partidos políticos en la crisis boliviana, Paz Zamora sostuvo que «también es responsable la prensa, la Iglesia y los organismos financieros internacionales, que aplaudieron las reformas de hace diez años».<sup>6</sup>

La crisis enfrentó de nuevo a Sánchez de Lozada y Evo Morales en torno a un elemento: la democracia. Mientras el gobierno del primero acusaba a Morales de promover un golpe de estado, éste apelaba a la calidad democrática de Bolivia. Como respuesta a las acusaciones, Morales aseguraba: «hemos optado por la democracia y la vamos a defender».<sup>7</sup> En una entrevista concedida a Radio Nederland, Morales se refirió a la defensa de la democracia por parte del pueblo como uno de los móviles de las protestas y a que el restablecimiento de la democracia pasaba por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo gobierno calificó de dictadura. El líder de los cocaleros apeló a la protección internacional de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para protegerles de «un criminal como Sánchez de Lozada». Con relación a la renuncia de Carlos

<sup>5</sup> Cletus Gregor Barié, «Bolivia: el trasfondo de la guerra del gas», *Papeles de cuestiones internacionales*, N° 84, invierno de 2004, pp. 99-105.

<sup>6</sup> Entrevista en *El País*, 22 de octubre de 2003.

<sup>7</sup> *El País*, 14 de octubre de 2003.

Mesa, Morales se mostró partidario de una asociación para la recuperación de la democracia a través de la defensa de la Constitución.<sup>8</sup>

Tanto Morales como Sánchez de Lozada defienden la democracia pero al, parecer, la entienden de forma diferente. Mientras el ex presidente probablemente se refiere a un concepto formal de democracia reducido a las elecciones y al acatamiento de la Constitución, Morales apela a una democracia real que permita que los sectores marginados sean efectivamente favorecidos por las políticas públicas. El 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, tras fracasar en sus intentos de diálogo y de moderación, renunció a la Presidencia acompañado del rechazo del 85% de los ciudadanos. Era demasiado tarde para negociar.

### **Implantación de un modelo económico neoliberal: privatización y políticas favorables a las multinacionales**

Al igual que otros gobiernos latinoamericanos, en los últimos años el Ejecutivo boliviano agudizó la política económica favorable a la privatización, privilegiando los intereses de las empresas transnacionales por encima de los de la sociedad civil. Antes de la guerra del gas ya se produjo una situación similar en la llamada «guerra del agua», en abril del año 2000. En aquella ocasión, la privatización de la distribución del agua en Cochabamba a favor de la empresa estadounidense Bechtel dio lugar a movilizaciones sociales que lograron frustrar el intento privatizador y provocaron la partida de Bechtel y la renacionalización del agua. Tres años después el recurso ha cambiado pero los motivos de la crisis coinciden.

En 1996, bajo el primer mandato de Sánchez de Lozada, se produjo la liberalización y privatización del sector de los hidrocarburos.<sup>9</sup> La capitalización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales

<sup>8</sup> Entrevista a Evo Morales, por Fernando Cabrera para Radio Nederland, 15 de octubre de 2003. En: [www.rnw.nl/informarn/html/act031015\\_evomorales.html](http://www.rnw.nl/informarn/html/act031015_evomorales.html) (consultado el 15 de octubre de 2003).

<sup>9</sup> En opinión de Marco Gandarillas, responsable del Área de Hidrocarburos y Recursos Naturales y miembro de la dirección ejecutiva del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), en Bolivia las empresas nacionales no se privatizaron sino que se capitalizaron, un proceso en el que los «socios» que aportaron capitales nuevos se hicieron propietarios de las empresas estatales. Marco Gandarillas, «La guerra por el gas: rebelión boliviana contra el saqueo y los saqueadores», *Economía y geopolítica del petróleo. Alternativas Sur*, Vol. II, 2003, N° 2, p. 163.

Bolivianos (YPFB) y la «invitación» a los intereses privados de las transnacionales para explotar este sector fueron consecuencias de la Ley de Hidrocarburos, dictada ese mismo año como resultado de la estrategia denominada «triángulo energético».<sup>10</sup> La ley permitía conceder la exploración y explotación de petróleo y gas a las petroleras privadas transnacionales por cuarenta años, ampliables a veinte más, sin límites de área máxima de actuación ni de número de contratos.

Con la capitalización y privatización de este sector se pretendía aumentar la oferta de empleo y la recaudación de impuestos. Pero no sólo no se crearon los empleos previstos sino que se produjeron 3.000 despidos, y el estado se ha empobrecido debido a la disminución de la tributación por las actividades relacionadas con el gas y el petróleo, que supone para las empresas el 18% de sus ingresos (antes, YPFB tributaba el 50%). El único beneficio económico que recibe Bolivia en relación con el gas y el petróleo son los impuestos de las transnacionales por el volumen exportado, una cantidad que controlan las propias empresas, desde la extracción hasta el transporte y distribución.<sup>11</sup>

La debilidad del estado se manifiesta en que las transnacionales imponen al gobierno las normas, en beneficio de sus intereses privados. Así lograron que el precio de venta del petróleo y sus derivados dependa del establecido a escala internacional. Por el contrario, como señala Eulogio Núñez Aramayo, agrónomo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Bolivia, la Superintendencia de Hidrocarburos sólo puede bajar los precios de los combustibles y derivados en el mercado interno boliviano cuando el precio internacional disminuye un 20%. Esto supone que la subida de los precios de los combustibles es rápida y su disminución muy lenta, «con lo que el estado boliviano compra su petróleo a las transnacionales siempre a un precio mayor al establecido internacionalmente».<sup>12</sup>

Sindicatos y organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y profesionales han calificado de robo las consecuencias de las medidas

---

<sup>10</sup> La política del «triángulo energético» de Sánchez de Lozada consistió en la capitalización de las empresas estatales, medida planteada como una necesidad para la mejora de estas empresas. Sin embargo se terminó entregándolas a consorcios transnacionales. *Ibidem*.

<sup>11</sup> Eulogio Núñez Aramayo, «Petroleras transnacionales en los territorios indígenas de Bolivia», *Economía y geopolítica del petróleo. Alternativas Sur*, Vol. II, 2003, N° 2, p.153.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

del gobierno. Así mismo, diferentes organizaciones sociales critican las campañas a favor de este tipo de proyectos que realizan algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, a través de la prensa. Mientras, el gobierno asegura que tiene autonomía para decidir al respecto sin contar con la opinión del pueblo.<sup>13</sup>

### **Protestas en el marco de movimientos sociales cada vez más fuertes**

En América Latina, la debilidad económica conduce al fortalecimiento de las reivindicaciones y movimientos sociales. Al igual que el movimiento zapatista en México, los levantamientos en Ecuador o el «cacerolazo» en Argentina, en Bolivia la población civil ha demostrado una gran capacidad para plantear sus demandas, materializada en enfrentamientos con los dispositivos policiales y militares —a pesar de su desigual capacidad de defensa—, el bloqueo de carreteras, el aislamiento de la capital, La Paz, o las huelgas generales.

Grupos sociales históricamente excluidos y marginados como los indígenas (que constituyen entre el 60% y el 80% de la población), son ahora movimientos organizados con capacidad para realizar exigencias e incluso derrocar a un gobierno, aunque no tienen tanta para la conformación o elección de otros. Por otro lado, la crisis en Bolivia ha favorecido la solidaridad de diversos sectores sociales como sindicatos, Iglesia o pueblos indígenas. Óscar Olivera, uno de los dirigentes de la marcha de septiembre de 2003 con el lema «por la vida, el gas y el derecho al trabajo», manifestó públicamente: «esta marcha es de solidaridad y compromiso con los compañeros aymaras que se han levantado contra la política del gobierno».<sup>14</sup>

La oposición a la exportación del gas nacional a EE UU y México y la demanda de revisión de la Ley de Hidrocarburos<sup>15</sup> fueron el deto-

<sup>13</sup> *Boletín Bolivi@press* (Internet), octubre de 2003.

<sup>14</sup> «Bolivia: miles marchan en La Paz», BBC Mundo. En: [http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin\\_america/newsid\\_3153000/3153610.stm](http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_3153000/3153610.stm) (publicada el 30 de septiembre de 2003; consultada el 7 de octubre de 2003).

<sup>15</sup> En relación con las demandas sobre los hidrocarburos, Marco Gandarillas distingue entre las viejas y las nuevas luchas nacionales. Las primeras se produjeron desde mediados de los años treinta hasta los setenta, a raíz de las políticas imperialistas para controlar América Latina y la lucha contra el comunismo. Las nuevas luchas se inician desde mediados de los años ochenta como respuesta a las políticas neoliberales. Marco Gandarillas, *Op. Cit.*

nante de las últimas protestas, pero éstas recogen problemas estructurales como las malas condiciones sociales de la población y el descontento hacia el gobierno, canalizado a través de la solicitud de dimisión del presidente, así como aspectos concretos como la subida salarial de los maestros o las demandas indígenas de recuperación del territorio y de reconocimiento de sus derechos. A la vez, la sociedad civil boliviana demanda el control e imposición de normas a las transnacionales, que se tenga en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas y la reapropiación de las riquezas petroleras. Las protestas por un modelo económico que agudiza la pobreza y aumenta el desempleo se dirigen hacia un cambio del sistema político y del modelo económico.

Aunque no hubo un sector social que liderara las protestas, existe una correlación entre el nivel de éstas y el de pobreza. Las localidades donde los enfrentamientos fueron más fuertes coinciden con poblaciones de mayoría indígena como Warisato y El Alto, donde el 85% de los habitantes son pobres. En este contexto de violencia y conflicto, los líderes del movimiento indígena Felipe Quispe (del Movimiento Indígena Pachakuti) y Evo Morales plantean sus propuestas desde las protestas. Ellos han liderado las demandas de renuncia del presidente. «Estamos combinando la legitimidad con la legalidad. Los movimientos sociales decidirán quién será el presidente en el marco de la Constitución», sostuvo Morales.<sup>16</sup> Había diferencias entre los distintos sectores movilizados sobre quién debía suceder a Sánchez de Lozada, pero también existían coincidencias en tres puntos básicos: la dimisión del presidente, la Asamblea constituyente y la modificación del modelo económico.

### **Incapacidad del estado para responder a las demandas sociales: el uso de la fuerza**

Una debilidad compartida por varios estados latinoamericanos en los últimos años es su menor capacidad para atender las demandas sociales de la población. La tendencia ha sido restringir el gasto público en ámbitos esenciales como la salud y la educación. Los mayores niveles de pobreza y el estancamiento de los niveles de indigencia en las últimas dos décadas

---

<sup>16</sup> *El País*, 16 de octubre de 2003.

harían imprescindible una inversión en gasto social significativamente mayor. Pero, desde el punto de vista institucional, se observan dos tendencias: reformas institucionales de baja intensidad y tendencia al uso del aparato estatal para la represión de los sectores excluidos.

La respuesta del gobierno boliviano a las demandas planteadas por la sociedad fue el uso de la fuerza y la represión. La acción policial y militar provocó enfrentamientos armados con la población civil. El balance del conflicto es de más de ochenta muertos y alrededor de 400 heridos. Uno de los focos centrales de los enfrentamientos fue la localidad de El Alto, a 14 kilómetros de La Paz, en la que algunos testigos calificaron lo ocurrido como una masacre. Diversos medios de comunicación confirmaron «el uso de armas de grueso calibre, incluidas ametralladoras pesadas, en contra del pueblo boliviano».<sup>17</sup> La represión fue tal que la Iglesia católica, el sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras organizaciones exigieron al gobierno la retirada inmediata de las tropas militares y policiales. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia lanzó un llamamiento para evitar nuevas víctimas y ratificó su posición de defensa de la institucionalidad democrática.

El otro gran escenario de conflicto fue Warisato, una población situada en el Altiplano, a poco más de cien kilómetros de La Paz. Sus ciudadanos, principalmente indígenas, sufrieron una represión que en septiembre de 2003 se cobró siete vidas y varios heridos. En este caso, la justificación del uso de la violencia por parte del gobierno fue el racismo y rencor de (y no hacia) los indígenas. Según el entonces viceministro de gobierno José Luis Harb, en la escuela rural de Warisato se impartieron «contenidos racistas y antirepublicanos», lo que, según las autoridades bolivianas, fue el origen de las revueltas. Otro argumento esgrimido por el gobierno para justificar la represión era la existencia de un proceso de golpe de estado liderado por Evo Morales y financiado por organizaciones subversivas del exterior, un argumento que el líder de los cocaleros rechazó de forma tajante. Todo esto muestra que el Ejecutivo no establece una relación causa-efecto entre la situación de pobreza, marginación y discriminación que han vivido los indígenas durante siglos y las protestas sociales.

---

<sup>17</sup> *El País*, 13 de octubre de 2003.

## Conflicto nacional e internacional

En el contexto de la globalización son pocos los conflictos exclusivamente nacionales y en los que no hay influencia de algún agente externo. En el caso de los conflictos por recursos en América Latina, el componente internacional lo aportan las empresas multinacionales que explotan y gestionan los recursos, aunque el conflicto se manifieste en el plano nacional como un enfrentamiento entre la sociedad perjudicada y los estados que lo permiten. Otros actores internacionales de alguna manera implicados son los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyas medidas económicas contribuyen a fomentar las desigualdades sociales.

Al igual que en otras sociedades de la zona, en las protestas sociales de Bolivia se percibe un sentimiento *antiamericano* motivado, en parte, por la influencia política de EE UU en el ex presidente Sánchez de Lozada. Las medidas económicas que adoptó estuvieron guiadas por los deseos de Washington y, bajo la presión estadounidense, aplicó un programa de erradicación de coca que llevó a la ruina a miles de agricultores. En la tarea se vio reforzado el sector militar, encargado de llevar a cabo la misión y beneficiario de parte del presupuesto del Plan Colombia destinado a entrenamiento militar.<sup>18</sup>

Durante la última crisis, EE UU apoyó a Sánchez de Lozada y lo elogió «por su compromiso con la democracia y el bienestar de su país».<sup>19</sup> Tras la respuesta militar de Lozada contra los manifestantes, la asesora de Seguridad Nacional de EE UU, Condoleezza Rice, advirtió contra «todo intento de derribar por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido».<sup>20</sup> Una posición contraria a la que mantuvo EE UU ante el golpe de estado contra Hugo Chávez en Venezuela el año 2002, en el que reconoció a los golpistas con la excusa de la orden de Chávez de disparar contra los ciudadanos.<sup>21</sup> Sin embargo, no intervino cuando se produjo la renuncia del ex mandatario y su salida del poder.

<sup>18</sup> Francisco Leal Buitrago, *Op. Cit.*

<sup>19</sup> *Observatorio. Estados Unidos-América Latina*, FLACSO-Chile, N° 8, enero de 2004.

<sup>20</sup> Ignacio Ramonet, «Bolivia», *Le Monde diplomatique*, edición española, año VII, N° 97, noviembre de 2003.

<sup>21</sup> *Ibidem.*

Por otro lado, se ha producido una internacionalización del conflicto que responde a la desviación del problema fuera de sus fronteras. El aspecto más conflictivo de la guerra del gas se sitúa ahora en la relación entre Bolivia y Chile. El *antichilenismo* de los bolivianos y el *antibolivianismo* de los chilenos exacerbaban los sentimientos racistas, que tienen que ver con la llamada «mediterraneidad» de Bolivia. La guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su salida al mar, se cuestiona ahora como si la solución a los problemas pasara por rediseñar las fronteras. Las tensiones diplomáticas llegaron a instancias de Naciones Unidas y a la Cumbre de Monterrey, celebrada en México en enero de 2004, trasladando el debate a la cuestión de si éste es un conflicto bilateral o internacional. La respuesta de las autoridades chilenas hace referencia al carácter nacional del problema. «El problema de la pobreza en Bolivia no se debe a la mediterraneidad, sino a errores de su política interna», sostuvo Edmundo Pérez Yoma, ex cónsul general de Chile en La Paz.<sup>22</sup>

El *antichilenismo* es un elemento unificador entre los bolivianos, algo conocido por el gobierno, que lo aprovecha para legitimarse a través de la estrategia del enemigo externo frente al cual se aglutinan y cohesionan todos los bolivianos. El gobierno busca con ello legitimidad y apoyo social. Pero esta herramienta recurrente es también inútil e ineficaz, como pone de manifiesto la inestabilidad política del país.

### **Un nuevo gobierno ante los mismos problemas**

El conflicto entre los movimientos sociales, las empresas multinacionales y el estado en torno a los recursos naturales se enmarca en la tensión cada vez más abierta entre intereses particulares e intereses universales. La confrontación entre interés privado e interés general o, en otras palabras, entre mercado neoliberal y gestión cooperativa, se manifiesta en el intento de que determinadas cuestiones como los derechos humanos, la crisis social y ambiental o el comercio internacional, entre otras, queden sometidas a la ley de la oferta y la demanda y a la denominada «mano invisible del mercado». Esto permite que, ante la escasez

---

<sup>22</sup> *El Mercurio*, 11 de enero de 2004.

de un recurso, grupos poderosos en una sociedad modifiquen el acceso a él e impongan una escasez estructural a los grupos más débiles.<sup>23</sup>

En Bolivia, el aumento de la precariedad de las condiciones de vida y la ausencia de oportunidades para la mayor parte de la población se une a la incapacidad del estado para atender las demandas sociales. Formalmente es el estado quien debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos y la paz y seguridad pero, en la última crisis, fueron algunos sectores sociales como la Iglesia, asociaciones gremiales y otras organizaciones las que tuvieron que velar por la protección de los ciudadanos ante la respuesta violenta del gobierno. La violencia y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos fue una de las razones por las que el ex vicepresidente Carlos Mesa se distanció de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Tras la renuncia de éste, el 17 de octubre de 2003, Mesa le sucedió en el cargo con tres objetivos principales: la creación de una Asamblea constituyente, la revisión de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria de un referéndum para definir una política de exportación del gas natural. Un reto nada fácil con una sociedad alerta y expectante y un gobierno que se caracteriza por la exclusión de los partidos políticos. Mesa cuenta con el apoyo de los partidos presentes en el Parlamento, a pesar de que, con el gobierno anterior, no estaban dispuestos a revisar la Ley de Hidrocarburos ni a convocar un referéndum.<sup>24</sup> Evo Morales se muestra abierto a dialogar con el nuevo ejecutivo mientras cumpla con lo prometido. No muestra una postura tan receptiva Felipe Quispe, quien piensa derrotar a Mesa en las próximas elecciones.<sup>25</sup>

La situación de Bolivia es de incertidumbre, tanto en el ámbito nacional como internacional. Al igual que muchos países de América Latina, se debate entre las medidas económicas neoliberales con las que intenta salvar su economía y los problemas estructurales de una sociedad cada vez más desprotegida, todo ello acompañado de una considerable deslegitimación de la democracia. El punto de equilibrio debe encontrarse entre la respuesta al pueblo y el mantenimiento de las rela-

---

<sup>23</sup> Thomas E. Homer-Dixon, «La escasez medioambiental, la violencia masiva y los límites del ingenio», *Las guerras modernas: pobreza, recurso, religión. Anuario CIP 1997*, Icaria-CIP, Barcelona, 1997, p. 43.

<sup>24</sup> Andrés Villar, «Bolivia, ¿y ahora qué?», *Op. Cit.*, p. 2.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

ciones con grandes potencias como Estados Unidos, organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la Organización de Estados Americanos y los países de la región, actualmente divididos en su posición respecto al conflicto con Chile. La solución al problema estructural de Bolivia no radica en el uso de las armas entre nacionales o con un país vecino, sino en la transparencia, una gestión adecuada y justa de los recursos y una democracia igualitaria y participativa que incluya a todos los sectores que forman el pueblo boliviano.